

AGENDA GLOBAL

Montevideo Uruguay - Jueves 9 de agosto 2007 - Nº 15 - Distribuido con *la diaria*



TWN
Third World Network

- Comercio sin justicia: África-Europa
- Demandas contra Argentina
- Cambio climático



Noción de patria

Roberto Bissio

Como muchos ecuatorianos, Rafael ha vivido en el exterior. Como estudiante brillante que fue, en 1991 obtuvo una beca del gobierno belga. En la universidad de Lovaina conoció a Anne, se enamoraron “a primera vista”, se casaron después de dos años de noviazgo y tienen tres hijos.

Este matrimonio le hubiera permitido a Rafael obtener residencia permanente en Bélgica. En cambio, la pareja resolvió radicarse en Ecuador, donde Anne enseña en una escuela primaria y Rafael continuó su carrera de profesor de economía, que luego lo llevó a ser ministro y actualmente Presidente de la República.

Ana también es ecuatoriana y también está en Bélgica. Vive junto con su hija Angélica, de once años, está separada de Xavier, el padre de Angélica, pero éste ve a su hija regularmente y ambos están orgullosos del desempeño escolar de la niña, que tras cuatro años de estudios ya habla perfecto francés. Se dice que Ana estaría considerando la posibilidad de casarse con un belga de origen colombiano, pero ella ha preferido no hablar en público sobre esta relación.

El deseo de privacidad de Ana es el mismo que ha llevado a Anne a no querer ningún rol de “primera dama” y continuar enseñando en el colegio La Condamine. Sus historias personales, sin embargo, se volvieron una crisis política en Bélgica y un conflicto diplomático entre este país y Ecuador el pasado 30 de junio.

Cuando comenzaban las vacaciones de verano, Ana y Angélica fueron arrestadas por la policía belga, acusadas de estar ilegalmente

en el país. Después de un mes de detención fueron introducidas a la fuerza en una furgoneta que las llevaba al aeropuerto holandés de Shiphol para ser deportadas. A mitad de camino la justicia belga ordenó parar el procedimiento. Fueron llevadas de vuelta a Bruselas, donde un médico constató trazas de golpes en las rodillas y el tórax de Ana y de ligaduras en sus puños y tobillos.

Angélica no vio a su madre ser golpeada, pero escuchó sus gritos. “Yo estaba desesperada”, cuenta Angélica. “Lloré mucho. Yo no me quería ir. Nos trataron como criminales, como si fuéramos a hacerles mal. Pero nosotras somos cristianas”.

Anne Malherbe, que es tímida y no está acostumbrada a lidiar con la prensa, fue a visitar a Ana y Angélica en el centro de detención. A la salida de la cárcel para extranjeros ilegales conocida como “127bis” en Steenokkerzeel, dijo que apresar a una niña a partir de una delación después de haberle permitido ir a la escuela pública durante cinco años, y mantenerla presa un mes, “parecía de la Gestapo”. “Me da vergüenza ser belga”, afirmó.

Esas declaraciones espontáneas de una ciudadana belga que no desempeña cargo oficial alguno en Ecuador llevaron al ministro belga de Relaciones Exteriores, Karen De Gucht, a convocar el viernes pasado al embajador ecuatoriano para pedir explicaciones por “ofensas infundadas e inaceptables”. La convocatoria a un embajador a rendir explicaciones es una expresión de tensión en las relaciones entre gobiernos y no es un recurso usual en Bélgica. De

Gucht alegó que si hubiera aceptado voluntariamente su repatriación, Ana Cajamarca podría haber recibido fondos de apoyo para facilitar su reinserción en Ecuador. Mencionó también la ayuda belga a Ecuador del orden de los diecinueve millones de dólares al año, lo cual puede ser tanto un alegato de buena fe como una velada amenaza.

El tema de las deportaciones forzadas de inmigrantes es un asunto candente en la política interna belga, donde está creciendo por un lado la derecha xenófoba y, por otro, hay activas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los *sans papiers* (indocumentados), que mantienen viva la memoria de la muerte en manos de la policía de una veinteañera nigeriana en 1998 durante su deportación forzada.

Selma Bekhelifa, abogada de Ana Cajamarca, argumenta que “los informes psicológicos muestran cómo la detención ha traumatizado a esta niña (Angélica)”. No hace falta ser especialista para creerle y fue en base a la Convención Europea de Derechos Humanos que un juez belga ordenó la libertad inmediata de ambas.

En Bélgica los sindicatos de policías se oponen al arresto de los extranjeros sin papeles por considerarlo “inútil”, pero el ministro del Interior quiere una política de “tolerancia cero”, incluso frente a los niños de los migrantes. Este debate es una parte no menor en las discusiones actuales sobre la formación de una nueva coalición de gobierno.

Por su parte, Rafael Correa se dirigió directamente a los belgas en su programa radial: “Quiero decirle a Bélgica, ese pueblo belga al que tanto

quiero –mi esposa es de allá y mis hijos tienen doble nacionalidad, la considero mi segunda patria–, a este ministro que dijo que, si los ecuatorianos estuvieran tan maltratados en Bélgica por qué todos se quieren quedar, ojalá algún día, por todo el abuso que hayan hecho de su naturaleza, no tengan una lluvia ácida o una catástrofe natural que los obligue a salir. En todo caso, si algún día ustedes, compañeros belgas, se ven obligados a salir de su propia patria tengan la seguridad de que aquí, en Ecuador, serán recibidos como hermanos, porque nosotros consideramos que no hay seres humanos ilegales y siempre tendremos los brazos abiertos”.

Correa anunció el inicio en 2008 de un “plan agresivo de retorno” de migrantes “con incentivos para que puedan regresar a su patria los que quieran hacerlo”. Entre otras medidas, el proyecto incluirá créditos, bonos de vivienda, asesoría y eliminación de aranceles para muebles y equipos que traigan del lugar de residencia.

Político al fin, Correa no pudo evitar referirse a su propuesta de “construir una patria donde nadie más tenga que salir y los que un día salieron puedan regresar, para evitar estas humillaciones de nuestros compatriotas en el extranjero” y se preguntó con ironía retórica: “Si el presidente Chávez, si Evo Morales, si Fidel Castro, si quien les habla metemos tres días presa a una madre extranjera con su hija de once años... ¿qué nos dirían?”

La decisión final sobre la suerte de Ana y Angélica será tomada por la justicia belga el 18 de setiembre. ■

Las conversaciones entre África y Europa sobre la liberalización del comercio han concitado oposición tanto entre gobiernos africanos como en sectores de su sociedad civil en cuanto a la naturaleza desigual de la sociedad y su potencial amenaza al desarrollo de la región.

Las advertencias son serias. Cabo Verde podría perder hasta el ochenta por ciento de sus ingresos por importaciones, tres cuartas partes de la industria de Ghana corre peligro de arruinarse y los países africanos podrían terminar dependiendo más del comercio con Europa que entre sí. Esos temores sobre el posible impacto de las actuales negociaciones de “libre comercio” entre Europa y sus ex colonias en África, el Caribe y el Pacífico (ACP) están comenzando a encender el debate público en la región.

Los gobiernos, analistas políticos, grupos económicos regionales y organizaciones de la sociedad civil africanos tienen cada vez más un mismo mensaje: los Acuerdos de Cooperación Económica que se están fraguando ahora entre Europa y los países ACP deben ser modificados sustancialmente para proteger las perspectivas de desarrollo de esos países.

“Si los Acuerdos de Cooperación Económica se firman tal como están, será la muerte y el suicidio para los agricultores”, declaró Jules Zongo, presidente nacional de la cámara regional de agricultura de Burkina Faso, en una marcha de protesta de dos mil agricultores realizada en diciembre en la capital del país, Ouagadougou. Varios meses antes, organizaciones de la sociedad civil realizaron manifestaciones en Senegal, como parte de una campaña mundial para parar los Acuerdos de Cooperación Económica, exigiendo al gobierno que no los firmara a menos que se introdujeran cambios importantes.

Los dirigentes africanos tomaron nota de esos reclamos. Cuando los jefes de Estado de África Occidental se reunieron en enero de 2007 en Ouagadougou en un encuentro cumbre, el presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, afirmó que en las conversaciones comerciales con la Unión Europea debían tenerse en cuenta las “preocupaciones legítimas” de los agricultores y otros productores.

La oposición a los Acuerdos de Cooperación Económica también se manifestó en el Foro Social Mundial celebrado en enero en Nairobi, durante el cual miles de representantes de la sociedad civil gritaron consignas y portaron pancartas que declaraban: “Para combatir la pobreza... decir No a los EPA (sigla en inglés de los Acuerdos de Cooperación Económica)”. En abril, la Coalición de Jóvenes Africanos Contra el Hambre movilizó más de mil activistas de

África teme que comercio con Europa signifique su “ruina” (Parte I)

Gumisai Mutume

veinte países en Gambia para lanzar una “gran campaña de ruido” para estimular el debate público sobre los acuerdos propuestos.

Más allá del impacto concreto que tendrán finalmente los nuevos acuerdos sobre las vidas de la gente, las negociaciones están concitando mayor atención por otra razón: comenzaron en momentos en que las conversaciones para profundizar la liberalización del comercio mundial, en el marco de la llamada Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), parecen estancadas.

Un factor de la suspensión indefinida de la Ronda de Doha el año pasado fue la reticencia de los países más ricos a liberalizar sus sectores agrícolas, a la vez que insistían en que los países en desarrollo abrieran sus propias economías aún más a productos provenientes del Norte. Algunos analistas consideraron las negociaciones sobre los Acuerdos de Cooperación Económica como un intento de la poderosa Unión Europea de llegar hasta sus socios comerciales ACP, más débiles, a través de un foro diferente y lograr así acuerdos que no pudo obtener en la OMC. Los veintisiete países de la Unión Europea tienen un PIB conjunto de 14.000 millones de dólares, mientras que treinta y nueve de los setenta y nueve países ACP están entre los países menos adelantados (PMA) del mundo.

Un nuevo escenario

Si bien las conversaciones de la Ronda de Doha se empantanaron, ya había habido cambios anteriores en la OMC que afectaron seriamente la naturaleza de las relaciones de la Unión Europea con los países ACP. De 1975 a 1994, ambas partes compartieron acuerdos especiales de cooperación para el desarrollo a través de una serie de acuerdos quinquenales, conocidos originalmente como los Convenios de Lomé. A través de éstos la Unión Europea otorgó preferencias comerciales a las exportaciones de los países ACP, sin requerir trato similar para sus productos.

Teniendo en cuenta el plazo de la OMC, en 2000 ambos grupos firmaron un nuevo acuerdo de cooperación, conocido como el Acuerdo de Cotonou, que abarca ayuda, comercio y cooperación política. Su objetivo fue “facilitar la integración económica y política de los países ACP en un mercado mundial liberalizado”. Sus impulsores también previeron la conclusión de las negociaciones sobre los Acuerdos de Cooperación Económica u otros acuerdos comerciales alternativos para principios de 2008, como forma de cumplir con las normas de la OMC. Las conversaciones iniciales sobre estos acuerdos comenzaron en 2002.

Algunos países en desarrollo temen ahora que la forma de abordaje de la Unión Europea con respecto a esos Acuerdos de Cooperación Económica los obligará a eliminar las protecciones comerciales tan rápidamente y hasta tal punto que lesione el desarrollo de sus propias industrias. “En ningún momento para el ACP un EPA era la primera opción en materia de acuerdos de libre comercio”, dijo el embajador de Mauricio ante la Unión Europea, Sutiawan Gunesssee. “No lo era. Pero no tuvimos alternativa”.

Según el ministro de Comercio de Zimbabwe, Obert Mpofu, todo nuevo acuerdo comercial debería reforzar, no socavar, “el desarrollo de nuestras economías, la generación de empleo, la prosperidad de nuestro pueblo y la reducción de la pobreza”.

¿Poniendo fin a la dependencia?

En contraposición, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Meter Mandelson, considera que los Acuerdos de Cooperación Económica son beneficiosos. Argumenta que cambiarán la relación entre la Unión Europea y África, pasando de una relación de dependencia con respecto a las preferencias arancelarias a una relación que promueve la competitividad comercial. Después de treinta años de acceso comercial

preferencial, los países africanos todavía exportan una gama limitada de productos básicos. “La mayoría se venden a precios que están por debajo de lo que estaban hace veinte años. Eso no es sustentable. Por cierto, eso no es un desarrollo sustentable”, afirmó.

El ministro de Comercio de Nigeria, Aliyu Modibo Umar, replicó: “Si treinta años de acceso comercial no recíproco a la Unión Europea no mejoraron la situación económica de los países ACP, ¿cómo puede un acuerdo comercial recíproco lograr algo mejor?” En lugar de eso, argumenta, sólo la liberalización del comercio “profundizará la distancia entre ambos (bloques) y probablemente destruirá el escaso desarrollo que algunos países ACP han logrado alcanzar en los últimos años”.

Opciones difíciles

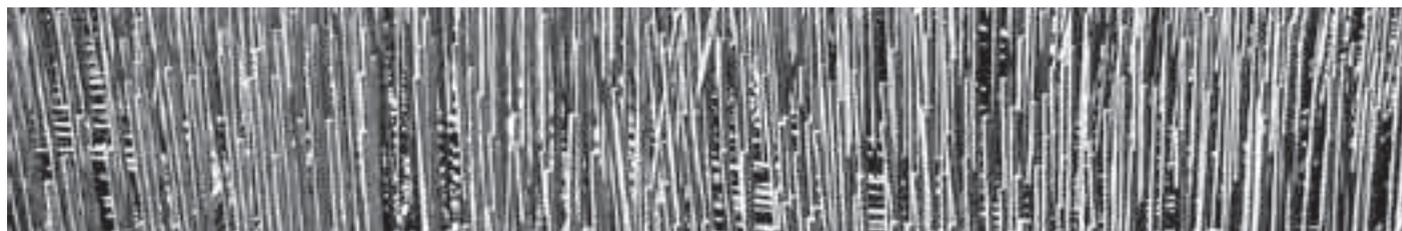
Según el tipo de Acuerdos de Cooperación Económica actualmente propuesto por la Unión Europea, los países ACP tendrían que liberalizar del ochenta al noventa por ciento de su comercio con el bloque regional para lograr un acceso libre de impuestos a los mercados europeos. Los países ACP podrían, pues, proteger con aranceles apenas una pequeña parte de sus productos frente a la competencia de las mercancías europeas.

Para permanecer dentro de esa banda estrecha, los gobiernos tendrían que hacer algunas opciones difíciles, señala Oxfam en un informe de 2006, *Unequal Partners* (Socios desiguales). Podrían escoger, por ejemplo, mantener los aranceles sobre importaciones caras tales como automóviles y productos electrónicos, proteger alimentos básicos como el maíz, eximir algunas industrias de la competencia o conservar la capacidad de apoyar el futuro desarrollo industrial.

Pérdidas fiscales

En el corto plazo, el aumento de aranceles a los productos europeos privaría a muchos gobiernos de una fuente importante de ingresos fiscales. “Muchos países perderían los ingresos que perciben de los impuestos arancelarios”, señaló Godfrey Kanyenze, del Instituto de Trabajo y Desarrollo Económico de Zimbabwe. Hasta que los países puedan diversificar la base de sus ingresos —lo cual a menudo es un proceso prolongado— podrían verse enfrentados a un déficit en sus presupuestos nacionales, lo cual posiblemente provoque recortes en los gastos destinados a educación, asistencia de la salud, reducción de la pobreza y seguridad social.

Un estudio del Mercado Común para África Oriental y Meridional de 2002 reveló que si todas las importaciones de la Unión Europea entraran a esa región libre de impuestos, los gobiernos perderían alrededor del veinticinco por ciento de sus impuestos comerciales y aproximadamente el seis por ciento del total de ingresos fiscales. Otro estudio, del Instituto Hamburgo de Economía Internacional, de Alemania, estimó que la reducción de los impuestos a las importaciones en países de la Comunidad Económica de los Estados de África





Occidental oscilaría del equivalente a 2,2 millones de dólares en Guinea-Bissau a 487,8 millones en Nigeria. La reducción sería más pronunciada en Cabo Verde, donde seguramente se perdería el ochenta por ciento de los ingresos por importaciones. De no hacer ajustes en los gastos, Cabo Verde y Gambia sufrirían déficit fiscales de 4,1 y 3,5 por ciento, respectivamente.

Esas predicciones funestas deben ser tratadas con precaución, responde el comisario de Comercio de la Unión Europea. "Si los analizamos cuidadosamente, la mayoría de los estudios son muy teóricos", argumenta Mandelson. "Asumen una liberalización inmediata y completa, e ignoran los beneficios económicos de la reforma". En su opinión, la Unión Europea y los países ACP pueden negociar la oportunidad y la graduación de las reducciones arancelarias para protegerse de caídas drásticas de los ingresos estatales. Y añade que si bien podría ser necesario tener una "protección de transición", el objetivo debería ser reducir la protección para alentar a las industrias locales a que sean más competitivas. Con el tiempo, los países ACP necesitarán adaptar sus economías para competir con el resto del mundo.

Temas que entran por la "puerta trasera"

En principio, el objetivo central del Acuerdo de Cotonou es la reducción de la pobreza. Ambas partes acuerdan que todo tratado negociado debería fomentar el desarrollo de los países ACP, pero difieren acerca de cuáles serían las políticas que mejor servirían a ese propósito, haciendo eco a debates que habían tenido lugar dentro de la OMC.

La Unión Europea, por ejemplo, propone que los países ACP adopten normas restrictivas para proteger la inversión extranjera, promover la competencia nacional y aumentar la

transparencia en los procedimientos de contratación pública. Los países en desarrollo bloquearon propuestas similares –conocidas como los "temas de Singapur", después de la Conferencia Ministerial de la OMC en la cual se plantearon por primera vez, por temor a que las normas obstaculizaran su capacidad de utilizar políticas comerciales para promover el desarrollo (ver *Africa Renewal*, enero de 2004).

"SI LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA SE FIRMAN TAL COMO ESTÁN, SERÁ LA MUERTE Y EL SUICIDIO PARA LOS AGRICULTORES", DECLARÓ JULES ZONGO, PRESIDENTE NACIONAL DE LA CÁMARA REGIONAL DE AGRICULTURA DE BURKINA FASO.

Pero los países ricos, al no haber podido introducir esos temas en los acuerdos de la OMC, intentan ahora insertarlos en los multilaterales y bilaterales, como condiciones para prestar ayuda o conceder préstamos, señaló Irungu Houghton, de Kenya, un analista de la política panafricana que trabaja para Oxfam. Y aseguró que los Acuerdos de Cooperación Económica forman parte de este intento por introducir los temas de Singapur por "la puerta trasera".

En varios países "hay una fuerte presión para abrir procesos de contratación pública para contratos y ofertas públicas a proveedores no

locales, quienes debido al alcance internacional que tienen pueden producir esos productos a un costo mucho más bajo que los contratistas nacionales", declaró Houghton a *Africa Renewal*. Una liberalización de la contratación pública de ese tipo eliminaría una de las pocas herramientas que los gobiernos han utilizado tradicionalmente para promover la industria local, es decir, favorecer a las empresas nacionales frente a las extranjeras.

Houghton señaló que en las Estrategias de Ayuda a los Países – documentos que imponen las condiciones crediticias del principal prestamista del continente, el Banco Mundial – se introducen cambios similares en las políticas de contratación pública.

No se han estudiado a fondo las consecuencias que tendría la adopción de los temas de Singapur en África, pero los analistas políticos coinciden en que solo la aplicación de nuevas leyes para poner en práctica las reformas será en sí mismo costoso. Oxfam estima que reformular las leyes nacionales y cambiar los procedimientos comerciales en cada uno de los dieciséis sectores de la reforma acordada en la Ronda Uruguay, costaría un promedio de 2,5 millones de dólares por país.

La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) insiste, sin embargo, en que no habrá Acuerdos de Cooperación Económica "sin normas de inversión y reciprocidad plena". Argumenta que "las EPA tratan, básicamente, de poner en práctica políticas comerciales progresistas" reduciendo las malas prácticas comerciales que obstaculizan la inversión en África. ■

Gumisai Mutume es periodista de Zimbabwe y escribe para la revista *Africa Renewal*, de las Naciones Unidas, en la cual se publicó este artículo la edición de julio de 2007.

Demandas contra Argentina. Luego de la crisis económica y financiera de 2001 en Argentina, numerosas empresas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para reclamar por violación del tratado de protección de inversiones entre ese país y Estados Unidos. A seis años de la crisis, aún se encuentran pendientes de resolución veintisiete demandas interpuestas contra Argentina y sigue recibiendo nuevas.

El último fallo del CIADI favoreció a la compañía norteamericana LG&E que mantiene una minoría accionaria en Gas Natural BAN, una de las distribuidoras de gas que opera en la provincia de Buenos Aires. Le otorgó, por decisión unánime de los tres árbitros, 57,4 millones de dólares, cifra considerablemente menor a la indemnización solicitada, de 268 millones de dólares.

El tribunal, compuesto por dos árbitros sudamericanos (Venezuela y Brasil) y un europeo (Dinamarca), concluyó que el Estado argentino "violó el trato justo y equitativo impuesto por el tratado de protección de inversiones", pero también admitió la gravedad de la crisis económica argentina. En este contexto, re-

chazó el argumento presentado por la empresa de que sufrió una expropiación de sus activos en el país. Sin embargo, las partes aún pueden presentar un recurso solicitando la anulación del laudo, lo que extendería el proceso por uno o dos años más.

Este fallo puede servir de antecedente para las demandas que aún están suspendidas, entre ellas la presentada por la empresa española Gas Natural, accionista mayoritario de Gas Natural BAN.

El holding italiano Impregilo, que tenía el cuarenta y tres por ciento de las acciones de la concesionaria Aguas del Gran Buenos Aires cuando a principios de 2006 el gobernador de la provincia, Felipe Solá, ordenó la rescisión del contrato por mala prestación del servicio, también recurrió recientemente al CIADI. El reclamo, que supera los cien millones de dólares, se fundamenta en las pérdidas que sufrió la empresa luego de la devaluación y pesificación, y en una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones entre Argentina e Italia por la expropiación y estatización de sus activos. ■

Monitor de Instituciones Financieras Internacionales en América Latina: <http://ifis.choike.org/esp>

China-Estados Unidos: normas de calidad. China y Estados Unidos acordaron medidas para mejorar la calidad de los alimentos y medicamentos que exporta el país asiático, tras una ola de escándalos en torno a productos contaminados. Funcionarios estadounidenses del Departamento de Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos viajaron a Beijing, donde firmaron un acuerdo inicial para reforzar las normas de seguridad y asegurar el cumplimiento de las mismas, informó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Los dos países buscan "incrementar la cooperación y el intercambio de información" en temas de seguridad alimentaria y de medicamentos, dijo el secretario de Salud de Estados Unidos, Mike Leavitt, en una declaración previa a la firma del acuerdo. También, "y a pedido de las autoridades chinas, mejorar la capacidad técnica de los entes reguladores de ese país para asegurar que sus exportaciones se ajusten a las normas de calidad estadounidenses".

China ha mantenido negociaciones similares con la Unión Europea y Japón, como parte de un esfuerzo para apuntalar la confianza sobre la seguridad de sus productos. (8/8/2007) ■

Supremo Tribunal de India desestima petición de Novartis.

El Supremo Tribunal de Madras desestimó el lunes 6 una petición presentada por la gigante farmacéutica suiza Novartis, que impugnaba la validez constitucional de la Ley de Patentes de India. Según informes de prensa de ese país, el Supremo Tribunal sostuvo en su argumentación para desestimar la petición que no era el foro adecuado para dilucidar si la Ley cumplía o no con el Acuerdo (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de la OMC).

La información decía que la petición de Novartis impugnaba la validez constitucional del párrafo (d) de la Sección 3 de la Ley de Patentes de 2005, conforme a la cual se rechazó su solicitud de patente sobre la forma cristalina beta del Imatinib Mesylate. La Ley niega la concesión de patentes por modificaciones menores a moléculas ya inventadas y que sean componentes de drogas.

En un comunicado de prensa emitido el lunes, Novartis declaró que la decisión tendrá consecuencias negativas en el largo plazo para la investigación y el desarrollo de mejores medicamentos para los pacientes de India y el resto del mundo. No obstante, la empresa farmacéutica suiza anunció que seguramente no apelará la decisión. (7/8/2007) ■

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en: <http://www.sunsonline.org>

El cambio climático subió otro escaño en la agenda mundial la semana pasada cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó en Nueva York su primer debate plenario sobre el tema.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, dijo que el cambio climático estaba recibiendo finalmente la atención superlativa que amerita. El Ártico se está calentando rápidamente, amenazando islas y ciudades costeras de todo el mundo, para los países de tierras secas, el cambio climático empeoraría la desertización, las sequías y la inseguridad alimentaria, advirtió. “No podemos continuar como si no pasara nada. Ha llegado la hora de adoptar medidas decisivas a escala mundial”, subrayó Ban.

La presidenta de la Asamblea General, Sheikha Haya Rashed Al Califa, agregó: “El cambio climático tiene varios aspectos, pero es fundamentalmente una cuestión vinculada al desarrollo. Lo que está en juego es el destino y el bienestar de nuestro planeta”.

El debate de la Asamblea General es el inicio de una serie de reuniones señeras, en especial una reunión de la ONU sobre cambio climático que se realizará en Nueva York el 24 de setiembre, a la que asistirán jefes de gobierno, y otra del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Bali del 3 al 14 de diciembre (Ver recuadro).

La ONU desea seguir siendo el ámbito central de las negociaciones

Cambio climático sube en la agenda mundial

Martin Khor

y los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Esto se ve amenazado en cierta forma por la iniciativa, confirmada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de iniciar un marco alternativo para “los países más contaminantes”.

Estados Unidos adhirió al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pero no al Protocolo de Kyoto. Según el Protocolo, los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con metas que llegaran solo al año 2012.

Las negociaciones comenzarán pronto en torno a un acuerdo posterior a 2012. Queda la gran interrogante de si en el nuevo acuerdo los países del Sur en desarrollo también tendrán que comprometerse a reducir sus emisiones.

John Holdren, científico de la Universidad de Harvard, comentó que las alteraciones climáticas ya están causando graves perjuicios, entre ellos mayores inundaciones, sequías, oleadas de calor, incendios y severas tormentas tropicales.

El tema es evitar interferencias catastróficas. Aun cuando ahora pueda estabilizarse la concentración de gases de efecto invernadero, igualmente habrá un aumento de la temperatura mundial de 1,5 grados centígrados. Existe la posibilidad de llegar a un “punto de inflexión” si el aumento se ubica por encima de los dos grados centígrados. Para evitar eso, las emisiones deben llegar a su punto máximo en 2015 y luego caer.

El problema es de gran magnitud porque el ochenta por ciento de la utilización de la energía proviene de combustibles fósiles. Ni el sistema energético ni los factores causantes del problema pueden cambiarse fácilmente.

Nicholas Stern, de la Escuela de Economía de Londres, declaró que, si no se hace nada, se podría perder como mínimo un cinco por ciento del ingreso nacional mundial debido al cambio climático. Si se adoptaran medidas oportunas se podría reducir drásticamente ese riesgo, con un costo del uno por ciento del PIB. El costo de adoptar medidas a tiempo es mucho menor que el costo de la inacción.

Durante el debate, el Grupo de los 77 (G-77) y China, en representación de los países en desarrollo, resaltaron numerosos problemas que impiden

encontrar una solución, y formularon una demanda de ocho puntos a los países ricos del Norte. Éstos deberían cumplir sus compromisos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como ofrecer fondos y transferir tecnología a los países en desarrollo de manera que puedan adaptarse mejor a los efectos del cambio climático, señaló el G-77.

Malasia consideró “lamentable que los países industrializados sean los responsables del grueso de las emisiones pero las naciones más pobres, que no hicieron nada para causar el problema, sean las que más expuestas están a sus efectos”, y también exhortó a los países ricos a transferir a los países en desarrollo tecnologías que no tengan efectos sobre el clima.

En una declaración muy directa y severa, India manifestó que cualquier acuerdo al que se llegue sobre cambio climático no debería establecer nuevas condiciones al crecimiento de los países en desarrollo. China dijo que habría que restringir las “emisiones de lujo” de los países ricos, mientras que habría que dar cabida a las “emisiones de subsistencia” y las “emisiones de desarrollo” de los países pobres.

India, China y Brasil destacaron que en un nuevo acuerdo posterior a 2012, los países industrializados deberían realizar mayores compromisos de reducción de emisiones y los países en desarrollo, por su parte, deberían formular planes nacionales para combatir el cambio climático.

Numerosos países africanos y del Caribe enfatizaron que ya estaban sufriendo los efectos del cambio climático y reclamaron la inmediata adopción de medidas urgentes y efectivas.

Entre los países del Norte hubo diferencias de opinión. La Unión Europea tuvo la posición más abierta, proponiendo metas globales para limitar el aumento de la temperatura mundial a dos grados centígrados y reducir las emisiones mundiales en un cincuenta por ciento para el año 2020 (comparadas con el nivel de 1990). Indicó que los países industrializados deberían reducir colectivamente sus emisiones en un treinta por ciento para 2020, y entre sesenta y ochenta por ciento para 2050 (comparadas con los niveles de 1990). Para Japón, las emisiones mundiales deberían reducirse a la mitad para 2050.

Estados Unidos, Japón y Australia pretendían que los países en desarrollo –al menos los principales– asumieran compromisos vinculantes en un nuevo acuerdo, mientras que la Unión Europea tuvo una posición más ambivalente al respecto.

Las conversaciones sobre este tema se prevén complejas y difíciles, ya que hay mucho en juego desde el punto de vista ambiental, económico y social. ■

Martin Khor es director de Third World Network (TWN).

BUSH INVITA A LAS “PRINCIPALES ECONOMÍAS”. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, está organizando una conferencia sobre cambio climático para los dirigentes de las “grandes economías”. La reunión será en Washington los días 27 y 28 de setiembre, apenas tres días después de una reunión de “alto nivel” de la ONU sobre cambio climático, al cual el secretario general del foro mundial invitó a jefes de Estado y de gobierno. El 2 de agosto, Bush envió a gobernantes de otros países una invitación a la “Reunión de las Principales Economías sobre Seguridad Energética y Cambio Climático”. Están invitados once representantes de países desarrollados (incluida la Unión Europea) y siete de países en desarrollo, más la ONU. La coincidencia de ambas reuniones es la última señal que ha dado el presidente de Estados Unidos sobre sus planes de establecer un marco internacional para el tratamiento del cambio climático que podría estar dentro o fuera del sistema de la ONU. (SUNS, 7 de agosto de 2007) ■

AGENDA GLOBAL

Redactor responsable: Roberto Bissio. **Redactor asociado:** Marcelo Pereira. **Editor:** Alejandro Gómez. (c) Instituto del Tercer Mundo (ITeM). El ITeM es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. www.item.org.uy / item@item.org.uy

